

Desigual

Drogas, bandidos y diplomáticos: formulación de política pública de Estados Unidos hacia Colombia

WINIFRED TATE

Universidad del Rosario, Bogotá, 2015, 308 pp.

DECIR QUE las declaraciones de amor en las lomas antioqueñas dependen de la cotización del café colombiano en el mercado de Nueva York se constituyó en una célebre afirmación de la dependencia de nuestro país con respecto a los Estados Unidos. Esa afirmación que se mencionó por primera vez en el libro *Colombia cafetera*, de Diego Monsalve, publicado en 1927, luego fue retomada por Mario Arrubla en *Estudios sobre el subdesarrollo colombiano* y por Eduardo Galeano en *Las venas abiertas de América Latina*, siendo el escritor uruguayo quien la hizo mundialmente conocida.

Esta frase podría actualizarse, a partir de la lectura del libro que comentamos en esta reseña, diciendo que *la vida o la muerte de los sembradores de hoja de coca en el departamento del Putumayo dependen de lo que se decida en el Departamento de Estado de los Estados Unidos o en la Presidencia de ese país*. La actualización de la frase serviría para recordar la crisis del café colombiano y la importancia de la cocaína, uno de los primeros productos de la economía estadounidense y mundial. El asunto está inscrito en los nuevos ámbitos de la dependencia, entre ellos la mal llamada “guerra contra las drogas”, en la cual nuestro país es uno de sus escenarios bélicos de experimentación.

La antropóloga Winifred Tate se ocupa de indagar a fondo esa compleja relación entre un lugar desconocido de Colombia, el Putumayo, y la guerra contra las drogas y el Plan Colombia agenciados por los Estados Unidos. Para hacerlo divide su libro en cuatro secciones: guerra contra las drogas; Putumayo en la víspera del Plan Colombia; “A qué nos referimos cuando hablamos del Plan Colombia”, e “Incidencias en política pública e inevitabilidad”. En total, el libro está conformado por una

extensa introducción (pp. 1-31), siete capítulos y unas amplias conclusiones (pp. 265-286).

El punto de partida es el adecuado, la “guerra contra las drogas”. Aunque esta se inició en el gobierno de Richard Nixon en 1971, adquirió una renovada importancia tras el fin de la guerra fría (1945-1991), cuando Estados Unidos necesitó dotarse de “nuevos enemigos”, sin que eso significara cambiar el énfasis contrainsurgente de su lucha contra el “comunismo”. Los difusores de esta nueva guerra plantearon que los antiguos enemigos comunistas que querían destruir a Estados Unidos ahora estaban representados por los grandes traficantes de drogas, con la finalidad de envenenar al pueblo de los Estados Unidos. Por eso, en términos internos se impulsó la política de la tolerancia cero, para criminalizar el consumo de estupefacientes, y se decidió librar una guerra en el plano estrictamente militar. Desde la década de 1970, Colombia ha sido uno de los escenarios de esa guerra, que adquiere una nueva relevancia en la década de 1990 en la medida en que desde los Estados Unidos, y en alianza con las fuerzas armadas de este país, se empezó a asociar el supuesto peligro para los ciudadanos norteamericanos con un pretendido pacto entre insurgentes marxistas y el tráfico de drogas, como empezó a ser leído el conflicto armado interno en Colombia.

La autora describe en forma convincente esta construcción ideológica, que se centró en la noción de narcoguerrilla, denominación utilizada por el embajador de los Estados Unidos en Colombia en la década de 1980, Lewis Tambs, un teórico de la geopolítica y un “tanque pensante” del Partido Republicano. Esta caracterización reforzaba la acción militar y evitaba dejar de lado la lucha contra el paramilitarismo, como lo dice Tate: “Tildar a la organización guerrillera de narcoguerrilla implicaba colocarlos falsamente en el centro del tráfico de drogas haciendo así invisible la mayor presencia de los traficantes paramilitares aliados con las fuerzas militares colombianas” (p. 38). O en forma lacónica, como lo dijo el coronel Richard Downie: “Las drogas representaron el ‘comunismo’ de los noventa” (p. 38).

Esta es la lógica que inspiró la aprobación del Plan Colombia, que debía sortear una contradicción: ¿cómo Estados Unidos iba a apoyar a unas fuerzas armadas, las colombianas, comprometidas con el terrorismo de Estado, tal y como lo indicaban los propios informes de la CIA y de una ONG de derechos humanos? Pues a ese escollo se le encontró solución por medio de la Enmienda Leahy, aprobada en 1996 en el Senado de los Estados Unidos, y en la cual se determinaba que los Estados Unidos proporcionarían ayuda militar antidrogas a aquellos ejércitos, o unidades internas de los mismos, que no estuvieran involucrados en la violación de los derechos humanos. Hasta Amnistía Internacional hizo lobby para que fuera aprobada, a partir de la discutible teoría de las “manzanas podridas” en el seno de los ejércitos, que podían ser extraídas del costal y así este permanecería incontaminado.

Con la Enmienda Leahy se eluden los pésimos antecedentes de las fuerzas armadas de Colombia, para transferirles millones de dólares con el fin de hacer la guerra interna contra las drogas, que es, y lo recalca Tate, una típica guerra contrainsurgente. En este contexto adquieren protagonismo los paramilitares, que actuaron como *proxies* (representantes, agentes, delegados) del Estado colombiano y de sus fuerzas armadas. El diseño del Plan Colombia, y la utilización de los paramilitares como *proxies*, estuvieron acompañados por la construcción de la idea del “Estado fallido”, como forma de justificar la militarización de los territorios en nuestro país.

Ahora bien, la alianza entre Estado y paramilitares, auspiciada por élites regionales, produjo unas fuerzas contrainsurgentes criminales que ahogaron en sangre las pocas reformas democráticas que se dibujaron en Colombia desde mediados de la década de 1980. Esa alianza también involucró a empresas extranjeras como la bananera Chiquita Brands, que suministró ayuda económica y militar a los paramilitares. Al mismo tiempo, en la Escuela de las Américas de los Estados Unidos se formaron oficiales y altos mandos de las fuerzas armadas de Colombia, que luego de regreso a este país fortalecieron las alianzas con sus *proxies* paramilitares.

La autora procede a analizar la situación específica del Putumayo, enfatizando en la influencia de las FARC sobre la población campesina, en la fumigación aérea que impulsan los Estados Unidos y que aplica incondicionalmente el Estado colombiano, y en las masacres agenciadas por los paramilitares como forma de desplazar a la insurgencia y restarle bases de apoyo. Tanto el Estado colombiano como los Estados Unidos llegaron a plantear el sueño de un “Putumayo sin coca”, lo cual se pretendió alcanzar con una represión indiscriminada, en la que intervinieron los ejércitos legales y los paramilitares.

Las dos primeras secciones del libro analizan los nexos entre las guerras contra las drogas proclamadas por los Estados Unidos y sus repercusiones en las comunidades del Putumayo. Es un relato documentado, convincente y riguroso. Pero lo que viene enseguida en las otras secciones del libro, la tercera y la cuarta, a nuestro modo de ver es menos interesante porque se centra en detallar los intrínquilis burocráticos del Plan Colombia y sus múltiples actores en juego, con lo que queda claro —y para eso no se necesitaban tantas páginas— que el Plan Colombia fue hecho en los Estados Unidos para el servicio de los Estados Unidos. Esta fue la puerta de entrada del Comando Sur en territorio colombiano y un beneficio para las empresas militares, públicas y privadas de los Estados Unidos.

Los dos últimos capítulos del libro, relacionados con “solidaridades en competencia” (capítulo 6) y “reivindicaciones putumayenses de política pública” (capítulo 7), no son tan amenos e interesantes. Se ocupan de rastrear algunas de las fuerzas en disputa en cuanto a los éxitos y logros del Plan Colombia, para mostrar cómo al final se impuso la visión rosa de presentar a los militares colombianos como “héroes” y a sus émulo estadounidenses como los “salvadores de Colombia”, ocultando así el costo humano del Plan Colombia, sobre lo cual la autora proporciona cifras impactantes a lo largo del libro.

Uno de los impactos negativos en el ámbito de los derechos humanos es la creencia ingenua de que haciendo lobby en los Estados Unidos se puede

alterar la verdad sobre los terribles crímenes y violaciones de los que son responsables esa potencia mundial y sus súbditos locales. Resulta poco convincente lo que la autora llama una “antropología de la política pública”, que como tema académico no tiene mucha novedad e interés, a no ser que se trate de legitimar teóricamente la contrainsurgencia y dar la impresión de que, a la hora de adoptar sus criminales políticas de guerra, Estados Unidos sea un régimen democrático.

Regresando al punto de partida de esta reseña, sobre la relación entre la vida de los putumayenses y lo que se decide en Washington, las palabras de un policía antinarcóticos colombiano, al confesarse ante la autora (ciudadana estadounidense), son elocuentes: “‘Yo amo a mi país y ustedes (Estados Unidos) nos están ayudando. Sin ustedes no podríamos hacer las cosas que hacemos’. Él era un policía antinarcóticos y le pregunté que si hacían cosas contra los guerrilleros, y me sorprendió cuando dijo: ‘Sí, yo hago mucho para combatir la guerrilla. *Cada vez que capturo guerrilleros, mato guerrilleros, eso significa menos droga en las calles matando a sus hijos*’ ” (p. 222, énfasis nuestro). Ahí está el nexo entre la vida y la muerte en Colombia y las decisiones que se toman en los Estados Unidos en su sangrienta guerra contra las drogas, un eufemismo de la guerra contrainsurgente.

Renán Vega Cantor

Profesor

Universidad Pedagógica Nacional